



1990 - 2006

Unidad VII

16 años de oscurantismo Neoliberal

Índice

1. Introducción.....	1
2. FSLN garantiza Transición Pacífica y defensa de las conquistas de la Revolución.....	2
3. Cracterísticas generales de las políticas neoliberales en Nicaragua 1990-2006.....	5
4. Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro 1990-1996, robo a la Republica y retroceso social.....	7
4.1. Inicio de las políticas neoliberales y robo del patrimonio publico.....	7
4.2. Privatización y violaciones de los derechos humanos	8
4.3. Entrega a los intereses yanquis: renuncia a la indemnización por 17 mil millones de dólares.....	8
5. Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), continuidad de las políticas neoliberales y la corrupción.....	10
5.1. Políticas neoliberales de Arnoldo Alemán.....	11
5.2. Inmensa corrupción de Alemán y la cúpula de derecha en Nicaragua.....	12
5.3. Tragedia del Huracán Mitch y robo de la ayuda.....	14
6. Gobierno de Enrique Bolaños, continuidad neoliberal y más corrupción.....	17
6.1. Los CENIS y el destape de la HUACA 2000-2002.....	17
6.2. Bolaños y la Privatización de la Salud pública y la crisis energética 2003-2006.....	19
6.3. Alzas en el transporte urbano colectivo.....	21
7. Oposición constructiva del FSLN y luchas populares contra el neoliberalismo.....	21
7.1. Oposicion constructiva del FSLN durante los gobiernos neoliberales.....	21
7.2. FSLN acompañando las luchas populares.....	22
La lucha de los trabajadores.....	22
La lucha de los Universitarios.....	23
La lucha contra la privatización de la educación y en respaldo a los educadores.....	25
Lucha contra la privatización de la salud y en favor de los trabajadores de salud.....	26
8. Bibliografía.....	27

1. Introducción

En la presente unidad estudiaremos las características de las políticas neoliberales en Nicaragua (1990-2006). Se abordará en el material de estudio lo siguiente: En un primer momento se explicará los aportes a la Paz y la Democracia realizados por el FSLN y el Comandante Daniel Ortega, además, se explicará como el Frente Sandinista contribuyó en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua durante la embestida neoliberal de 1990 al 2006.

Así mismo, se expondrá las características generales de los gobiernos neoliberales, y como estos obedeciendo a los organismos financieros internacionales y al imperialismo ejecutaron el plan neoliberal en contra del pueblo nicaragüense. El neoliberalismo desató una intensa campaña de privatizaciones de empresas estatales, así como del sector Salud y Educación perjudicando de gran manera a las inmensas mayorías de la nación.

Posteriormente, se mencionará de qué manera el gobierno de Arnoldo Alemán continuó con la aplicación de las medidas neoliberales en nuestro país, sumado a esto, se detallará los actos de corrupción que se cometieron durante el gobierno Alemán-Bolaños (1997-2002), y cómo estos delitos cometidos en esta administración causaron mayor pobreza y miseria en Nicaragua, generando un ambiente de desesperanza en la población en general.

Finalmente, explicaremos las características del gobierno de Enrique Bolaños, y sobre todo, se detallará como en este gobierno continuaron las políticas neoliberales, alcanzando el mayor nivel de ejecución en los sectores de Educación (autonomía escolar, lucha por el 6%) en Salud (privatización total de hospitales y centros de salud) así como la incapacidad de este régimen por dar solución a problemas como el del suministro de la energía eléctrica (los apagones), además del problema en el sector transporte.

Objetivos

- Destacar el continuado aporte a la Paz del FSLN y del Comandante Daniel Ortega en la transición febrero-abril de 1990, y su compromiso en defensa de las conquistas del pueblo.
- Caracterizar las políticas neoliberales en Nicaragua de 1990 al 2006 y sus consecuencias en el retroceso social vivido en ese periodo.
- Mostrar las políticas de privatización, robo al patrimonio nacional y violación de los derechos humanos del régimen de Violeta Barrios de Chamorro.
- Mostrar la continuidad de las políticas neoliberales del Presidente Arnoldo Alemán, la inmensa corrupción durante su gobierno y su clara responsabilidad con la tragedia del Huracán Mitch.
- Exponer las principales características del gobierno de Enrique Bolaños en la continuidad del neoliberalismo y la corrupción, entre ellos, los CENIS y el destape de Huaca 2000-2002.
- Destacar el papel de oposición constructiva desarrollada por el FSLN durante los gobiernos neoliberales y el acompañamiento a las luchas populares en ese periodo.

2. FSLN garantiza Transición Pacífica y defensa de las conquistas de la Revolución.

Durante este periodo histórico que duró 16 años, también dio inicio a la globalización neoliberal en lo económico, social y cultural, que impuso la reducción drástica de la inversión en programas sociales que la revolución había promovido, así como la privatización de los sectores estratégicos de nuestra economía nacional, como las empresas nacionales, los servicios públicos, la salud, la educación. Cambios que apuntaban hacia la concentración de la riqueza en pocas manos.

Durante este periodo de tres gobiernos neoliberales, los empresarios tomaron las riendas del poder político en Nicaragua, presionando para provocar el desmonte de los sindicatos, y el abandono estatal de las cooperativas de producción agrícola y de los pequeños productores en el campo. En lo político se trató de establecer en el imaginario colectivo, en la opinión del pueblo, que la intervención del estado en la economía era ineficiente, creaba distorsiones a la libertad del mercado desincentivando el progreso. La satanización de la gestión pública fue su objetivo, para crear una fe ciega en la superioridad del mercado y de la iniciativa privada.

Se trató en lo cultural de una ofensiva propagandística que se difundía a través de los medios de comunicación, que premiaban fórmulas de vida individualistas que apuntaban hacia el éxito personal, alimentando la desunión entre los trabajadores, con el objetivo de interrumpir entre las clases populares, toda perspectiva de construcción de lo común y de resistencia. Pero nuestro pueblo se mantuvo en pie de lucha, con espíritu combativo durante todo ese periodo.

El Comandante Daniel Ortega resumía este periodo de la siguiente forma:

“Podríamos decir que, frente a los planes de destrucción de las conquistas de la Revolución que empezaron a desarrollarse, hubiésemos tenido toda la autoridad y legitimidad para ir a la lucha pacífica en las calles para derrocar al gobierno. Y dijimos: no!; Vamos a librar la batalla defendiendo las conquistas de los trabajadores, defendiendo las conquistas sociales del pueblo nicaragüense. Batalla que no era fácil, porque enfrente teníamos un poder establecido, con una mayoría en la Asamblea Nacional, con un Poder Ejecutivo que tenía la autoridad para tomar decisiones y ordenar represión, como no titubearon en hacerlo múltiples veces, lo que significó la muerte de muchos trabajadores, y también significó la muerte de algunos hermanos policías.

Es decir, el plan diabólico de la derecha fue buscar cómo confrontar a los mismos hermanos nicaragüenses. Y dijimos, vamos a librar esta batalla, con recursos limitados, recursos materiales limitados. Vamos a librar esta batalla con el coraje y con el derecho que nos asiste... Y empezamos a librar la batalla.

Cuestionando las medidas que querían establecer en nuestro país, en primer lugar, arrebatando sus propiedades a los trabajadores, arrebatando las tierras a los campesinos y a las cooperativas; arrebatando al pueblo el derecho a la educación, privatizándola; arrebatando al pueblo el derecho a la salud, privatizándola.

Es decir, hicimos frente. Y llegó un momento en que la protesta popular tenía una fuerza tan grande a nivel nacional, era tan grande la protesta nacional, que se habían levantado ya barricadas aquí en Managua, en los departamentos, ¡pero sin fusiles!”

[...] “Ellos lo primero que hicieron fue ir contra la Constitución de 1987, y la reformaron. No íbamos a utilizar nosotros la fuerza para impedir que ellos reformaran la Constitución; no íbamos a alentar la formación de grupos armados para evitar esa reforma, o para evitar todas las medidas que tomaron, sino que al contrario lo que hicimos fue seguir batallando, seguir luchando.

En medio de esa lucha, ellos instalando su esquema, instalando su modelo; tuvieron el tiempo, tuvieron las condiciones, porque después de esas grandes remecidas, inmediatamente después del 25 de abril hubo un período de calma, de mucho diálogo, mucho intercambio, reuniones para ver cómo se cumplía con los acuerdos, o los reclamos, porque no estaban cumpliendo con los acuerdos.

Al final ellos tuvieron todo el tiempo: 17 años tuvieron para instalar su modelo, instalar un Estado de acuerdo a su visión, de acuerdo a sus intereses, donde según ellos el pueblo se convierte en un factor totalmente secundario”.

Cmdt Daniel Ortega, 30 de abril 2014.

En 1990 el Frente Sandinista de Liberación Nacional consecuente con sus principios revolucionarios, su amor profundo a Nicaragua, y su lealtad indiscutible al pueblo humilde y trabajador acató la voluntad popular electoral en febrero de 1990, con el objetivo de preservar la paz y aportar a la consolidación de los procesos electorales en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de haber perdido las elecciones, el FSLN logró preservar una significativa cuota de poder; en ese momento era el partido más numeroso y mejor organizado; controlaba el 42.39% de los votos de la Asamblea Nacional, todas las estructuras del Poder Judicial, así como amplios sectores de la administración estatal.

El FSLN junto al comandante Daniel Ortega hizo posible una transición ordenada, pacífica y, y el 27 de febrero de 1990 sentaron las bases de la transición democrática, se conformaron dos equipos negociadores presididos por el jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), Humberto Ortega, y Antonio Lacayo ministro de la presidencia del gobierno de Violeta Barrios . Además, de la participación de Joao Baena Soares, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Elliot Richardson, representante del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), y Jimmy Carter, ex presidente de los Estados Unidos, en calidad de observadores internacionales.

Las negociaciones terminan el 27 de marzo del mismo año, con la firma del Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial, conocido como el Protocolo de Transición. Dentro los acuerdos más importantes encontramos: el reconocimiento de las elecciones como base para la construcción de la democracia y la Paz; seguridad jurídica a los beneficiarios de la Reforma Agraria rurales y urbanas, asignados antes del 25 de febrero de 1990; respeto de los rangos, escalafones y mandos del ejército, incluyendo la permanencia del Humberto Ortega como General en jefe del EPS; reducción significativa del Ejército; desmovilización de la Resistencia Nicaragüense (RN) antes del 25 de abril para garantizar el traspaso de gobierno en un clima de paz.

La RN o Contra, condicionó su desmovilización a la firma de nuevos acuerdos con el gobierno, donde los ex combatientes de la RN recibieron tierras y recursos productivos para asentarse con sus familias, bajo la protección de fuerzas especiales de la ONU. Después de concluida la desmovilización el 27 de junio de 1990 se reconoció a la RN como organización política legal.

El FSLN reconoce democráticamente el resultado y trabaja, primero para proteger al pueblo con leyes de la propiedad en beneficio de campesinos y pobladores de la ciudad, sabiendo que los neoliberales pretenderán quitar tierra, casas y lotes de terrenos al pueblo, y segundo, protegiendo la educación superior pública con el 6% constitucional. También trabaja por la Paz y la estabilidad nacional con el acuerdo con el nuevo Gobierno, con el llamado Protocolo de Transición, que implicaba, entre otras cosas, protección al Ejército, que se implementará el Acuerdo de Sapoá de desmovilización y desarme de la contrarrevolución.



Lectura del “Pacto de Sapoá” por el Embajador Joao Baena Soares, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Sapoá, Nicaragua, 23 de marzo de 1988

El FSLN se prepara para continuar la lucha en nuevas circunstancias. Daniel llama a Gobernar desde abajo, para defender las conquistas de la revolución y enfrentar las políticas neoliberales. Para ello, el FSLN, encabezado por el Comandante Daniel, orienta la conformación del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), para defender los derechos de los trabajadores y enfrentar las políticas privatizadoras y antipopulares creándose de esa manera el Área Propiedad de los Trabajadores (APT).



3. Características generales de las políticas neoliberales en Nicaragua 1990-2006.

Luego de las elecciones del 25 de febrero de 1990 en Nicaragua, se inició una etapa difícil para la población nicaragüense debido fundamentalmente a la aplicación de medidas contrarrevolucionarias, es decir a la puesta en marcha del modelo neoliberal. El neoliberalismo propone la reducción drástica del gasto público, así como el desmantelamiento del Estado, para garantizar la menor intromisión posible de éste en los asuntos de la economía, dejándole la conducción de la economía a los “actores privados y al libre mercado”.

El neoliberalismo promueve políticas económicas basadas en la fe ciega de la privatización de los recursos estatales, en la reducción en los gastos públicos y la desregulación de la economía, situación que dejó desprotegida a la gran mayoría de nicaragüenses ante las inclemencias del libre mercado.

En Nicaragua, durante los gobiernos neoliberales las desigualdades aumentaron de forma insostenible, los derechos laborales y sociales fueron recortados en nombre del libre mercado. Entre 1990 y 2006, más de 2 millones de personas sufrían pobreza. El 82 por ciento de la población, es decir, más de 4.2 millones de personas, seguían viviendo por debajo del umbral de la pobreza y más de 2.1 millones de nicaragüenses malvivían en la indigencia. Estas cifras se dan en el marco de la que llamaron “estabilización económica del país” pero se da un descenso absoluto, del gasto social y de una caída significativa en la eficacia de su empleo.

Así, según la CEPAL, los recursos por habitante dedicados a salud, educación, vivienda y protección social disminuyeron desde 1990 de manera alarmante, perjudicando a toda la población del país.

La larga crisis y el costo social del modelo neoliberal aplicado desde 1990 al 2006 agudizaron los profundos dramas de una sociedad empobrecida y cada vez se hizo más común ver a niños viviendo en las calles, ancianos mendigando, familias comiendo de la basura. Los datos de la miseria son escalofriantes en la niñez. Fueron los niños y niñas y los adolescentes, en quienes la pobreza golpeó más violentamente en los tres períodos de gobierno del régimen neoliberal. Por otro lado, la educación era un total desastre, las escuelas primarias ni servicios básicos poseían. El 76 por ciento de las escuelas públicas de Nicaragua no reunían los requisitos más elementales para funcionar como centros de enseñanza y los salarios de los maestros no les alcanzaba para comprar una canasta básica y mantener una vida digna. Más del 33 por ciento de la población adulta de Nicaragua se volvió analfabeta, de la cual más del 50 por ciento eran mujeres.

Es decir, cerca de un millón de personas de más de 15 años carecían de capacidades básicas en lectura, escritura y cálculo. No hay que olvidar que el analfabetismo va unido a la extrema pobreza, ya que la tasa de alfabetización guarda una muy estrecha relación con los niveles de ingresos que poseen las personas. Durante el régimen neoliberal la población sufrió en toda la dimensión de la palabra la más cruenta exclusión social.

Los gobiernos neoliberales de Nicaragua (1990-2006) vendieron las empresas públicas que fueron compradas, casi en su totalidad, por transnacionales de los países más ricos en alianza con inversionistas locales. Los programas de privatización significaron, sólo en el período 1990-1999, la transferencia de más de 400 millones de dólares del patrimonio público a diversos poderes económicos de los centros del capitalismo mundial.

El producto de esa entrega de recursos públicos nunca se invirtió en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sino que constituyó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país. Una verdadera mafia político-empresarial se apropió de una inmensa riqueza acumulada con el trabajo y el ahorro de varias generaciones de nicaragüenses.

Se produjo así con las privatizaciones una doble expropiación. Las transnacionales extranjeras repatriaron beneficios a costa del empobrecimiento de nuestro país. Y la oligarquía nacional se hicieron más ricos, despojando a las mayorías de la riqueza social que representaban las empresas públicas. Los ricos se hicieron más ricos no sólo en términos absolutos, sino que también en términos relativos en comparación al resto de la población nicaragüense que durante el neoliberalismo se volvió miserablemente pobre.

4. Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro 1990-1996, robo a la República y retroceso social.

4.1. Inicio de las políticas neoliberales y robo del patrimonio público

Al llegar al poder el gobierno de Violeta Barrios promovió el desmantelamiento del Estado con el objetivo de saquear a la nación y empobrecer a su población. Los mecanismos utilizados fueron el desmontaje del erario público, la privatización de las empresas y servicios públicos, mandó al desempleo a más de 170 mil trabajadores del sector público, el endeudamiento del país y la corrupción de sus funcionarios, el desempleo de los trabajadores y la descapitalización de los productores. Lo primero que hicieron fue desmantelar la protección arancelaria, eliminando los impuestos a la importación de mercancías competitivas con la producción nacional, lo que dejó desamparado a nuestros productores, beneficiando por supuesto a los importadores y sobre todo a las empresas estadounidenses y europeas que pudieron invadir nuestra economía con mercancías desgravadas, mientras las empresas nacionales, de distintos tamaños, eran desprotegidas, lo que luego condujo a su quiebra y a generar más desempleo.

Si hasta 1990 el promedio de imposición arancelaria era de 50%, al final del período neoliberal dicho porcentaje había bajado a 5%. Las actividades que más sufrieron fueron las alimentarias y artesanales. Nicaragua comenzó a ser invadida de alimentos, muebles o zapatos y nuestros productores artesanales comenzaron a resentir fuertemente dicha competencia desleal. A su vez a las grandes corporaciones transnacionales se les exoneró de todo tipo de impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto al valor agregado, etc. Esta situación contribuyó incluso a la quiebra de muchos productores y empresas nacionales que fueron sustituidas por empresas extranjeras. Se calcula que el fisco dejó de percibir cada año 500 millones de dólares por exenciones y exoneraciones y por reducción de los aranceles externos. Las corporaciones extranjeras se enriquecieron y Nicaragua entera se empobreció. Es así que Nicaragua tuvo la tributación más regresiva del mundo, pues el sector privado apenas pagó el 10% de las recaudaciones, mientras que el pueblo aportó el 90% del presupuesto fiscal de la república. Alrededor de 400 empresas del Estado fueron privatizadas, robadas o se vendieron a precio de guante mojado, incluyendo los bancos estatales, como el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Popular, que fueron privatizados quedando desprotegidos los productores nacionales del campo y la ciudad y la pequeña industria artesanal.

Muchas de estas empresas habían sido confiscadas a los somocistas y a los enclaves extranjeros durante la década de los 80: empresas de comunicación, energéticas, mineras, ganaderas, algodóneras, tabacaleras, cafetaleras, arroceras, cañeras, industriales y comerciales, eran empresas Área Propiedad del Pueblo, que fueron vendidas a precio de guate mojado, perdiendo el pueblo y la economía nacional todo ese gran patrimonio.

La privatización de estas empresas, benefició a la oligarquía en el poder y también a los que se les había confiscado o expropiado, se les indemnizó sumas millonarias pagadas por el presupuesto nacional, lo que comenzó a agrandar la deuda interna del país. Se calcula que el patrimonio público perdió alrededor de 1,000 millones de dólares por haber vendido con facturas subvaluadas las cuatrocientas empresas, tanto las empresas de la Corporación Nacional del Pueblo (CORNAP) como las empresas públicas nacionales, sin contar con las ganancias que el Estado dejó de percibir.

4.2.Privatización y violaciones de los derechos humanos

En cuanto llegaron al poder, los gobiernos neoliberales comenzaron a despedir a cientos de miles de asalariados. Lo primero que hicieron en este sentido fue despedir a 90.000 nicaragüenses de las fuerzas armadas que vivían de su salario. Inmediatamente después despidieron a 50.000 trabajadores de las empresas de las corporaciones estatales, pues tenían que entregarlas libres de sindicatos y prestaciones sociales a los antiguos o nuevos dueños antes de privatizarlas. De los ministerios despidieron a más de 30,000 empleados, entre ellos a 11,000 maestros.

Pero el desempleo más masivo se generó en el seno del campesinado y del artesanado, al cortarles el crédito a los pequeños productores del campo y la ciudad. Recordemos que Nicaragua es un país donde los cuenta-propistas son la mayoría de la población laboral. Más de 500.000 campesinos y artesanos se convirtieron de la noche a la mañana en desempleados, semi-empleados o precaristas. Debido a esta situación, muchos campesinos emigraron a la ciudad, otros tantos emigraron a Costa Rica y Estados Unidos. Se calcula que durante todo el periodo neoliberal, el número de nicaragüenses que migraron al exterior por razones económicas fue mucho mayor al que emigró durante la guerra de los años 80.

En síntesis, en estos años, los ingresos del Estado disminuyeron, los gastos del Estado se destinaron a pagar servicios de la deuda interna (mayormente dirigida a los del gran capital, beneficiario de las millonarias indemnizaciones de la corrupción neoliberal), lo que disminuyó grandemente el monto de los servicios e inversión en educación, salud, electrificación, agua, carreteras y caminos, crédito a los campesinos, etc.

El resultado de toda esta situación se refleja en la precipitación abrupta del Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua, **el que descendió del escalón 60 en que lo dejó el gobierno sandinista en 1990, al escalón 112 en que lo dejaron los gobiernos neoliberales en el año 2006**, producto de las políticas de los Gobiernos Neoliberales.

4.3.Entrega a los intereses yanquis: renuncia a la indemnización por 17 mil millones de dólares

El 17 de septiembre de 1990 el ministro del Exterior nicaragüense Enrique Dreyfus anunció, disimulando entusiasmo (como natural lacayo del imperialismo yanqui), que el día 12 de septiembre el Gobierno de Nicaragua “había desistido oficialmente de continuar con la demanda presentada por el Gobierno sandinista contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya”. De hecho, el caso estaba en ese momento en una especie de paréntesis. Tras el histórico fallo de junio de 1986, la Corte había pasado a la etapa de determinar el monto que correspondía pagar a Estados Unidos en concepto de indemnización por la ilegal conducta y su violación del derecho internacional.

Nicaragua había calculado los daños y perjuicios causados por la guerra en un monto de 17 mil millones de dólares y aun cuando Estados Unidos había ignorado todo el procedimiento, el expediente estaba técnicamente abierto y políticamente representaba una situación irritante para el gobierno Bush que se venía autoproclamando como el “mayor defensor del derecho internacional”.

Desde hacía meses, los mismos medios de comunicación norteamericanos habían informado que Washington condicionaba la ayuda al gobierno de Violeta Barrios solo si retiraba la demanda pendiente en la Corte Internacional de Justicia y que ese asunto también “interfería” en el ritmo de los desembolsos de la ayuda ya aprobada.

En abril de 1991 Washington solo había desembolsado 287 de los 541 millones de dólares ofrecidos. Aunque el gobierno Chamorro se inclinaba a acatar la solicitud de los norteamericanos considerando el tema de La Haya no cuestión de principios ni siquiera una ficha negociadora sino un estorbo, el Ejecutivo prefirió esperar hasta el último momento.

Días antes de la visita de Violeta Barrios a Washington en abril de 1991 el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Nacional la derogación de la ley 92, que exigía un proceso de consulta antes de que el Ejecutivo negociara unilateralmente la indemnización ordenada a Estados Unidos por la Corte. La tendencia del gobierno venía siendo la de postergar el retiro definitivo de esta demanda o al menos, evitar la publicitación del paso para no desatar un revuelo político interno y un enfrentamiento con los sandinistas en momentos en que otros puntos más prioritarios para el gobierno se encontraban en la agenda de la negociación. Así mismo mientras el gobierno y La Prensa calificaban el hecho como el inicio de una “era de amistad y cooperación” con Estados Unidos, y el FSLN y Barricada lo condenaban como una “vergüenza nacional”, el gobierno nicaragüense anunciaba el retiro de la demanda contra Estados Unidos apenas 24 horas antes de su arreglo final con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y para que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID desembolsara otra partida de “ayuda para el desarrollo”.

Poco convincente resultó el argumento del Canciller Enrique Dreyfus de que era “pura casualidad” el que el retiro de demanda ante La Haya se produjera un día antes de que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo certificaran a Nicaragua con “cero mora” de la deuda externa.

Según la explicación oficial, el abandono de la demanda obedecía a un problema “de conciencia”, pues Nicaragua había recibido centenares de millones de dólares de Estados Unidos, incluyendo el apoyo norteamericano para la cancelación y renegociación de la deuda. Para el FSLN esta justificación es la prueba fehaciente de que Nicaragua se había sometido al chantaje de manera humillante.

Según Barricada de esa época: “El Canciller Enrique Dreyfus nos ha dejado como serviles, excusando a los norteamericanos por no haber aceptado nunca la jurisdicción de una Corte Internacional... El juicio de La Haya nunca fue una cuestión partidista o revanchista contra Estados Unidos, sino una cuestión nacional, de Patria, de dignidad.

Además, la demanda ganada por Nicaragua constituye una conquista histórica de todas las naciones pequeñas que recurren al derecho internacional para reclamar frente al atropello de los poderosos. No tenía derecho este gobierno de disponer de nuestro patrimonio político y del patrimonio político de otras naciones de esta manera. Es una vergüenza nacional”

5. Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), continuidad de las políticas neoliberales y la corrupción

El 20 de octubre de 1996 se realizaron las elecciones generales en Nicaragua, en este proceso electoral obtuvo la “victoria Arnoldo Alemán”, estas elecciones tuvieron la particularidad de ser extremadamente fraudulentas por las siguientes razones; en la madrugada del domingo 20 de octubre se seguían imprimiendo boletas para las elecciones de Managua en la imprenta INPASA (elegida por el Consejo Supremo Electoral para hacer este trabajo tras una tensa polémica).

El alarmante retraso de la imprenta, previsto y anunciado, provocó desórdenes increíbles y constituyó una violación de los plazos de la Ley Electoral y de los términos del contrato que firmó esta empresa con el CSE. En este ambiente de desorden que hubo en todo el país, especialmente notable en Managua, empezaban a asomar por todos lados las inconsistencias. Lo único consistente fue el deseo de votar de la inmensa mayoría, la voluntad de participar con los votos para cambiar las cosas y salir de una vez del desgobierno y miseria de los años neoliberales de Violeta Barrios.

La voluntad popular se puso a prueba. La mayoría de las juntas receptoras de votos de todo el país abrió tarde. Por varias razones, todas ellas encadenadas. No fueron puntuales o no llegaron nunca algunos de sus miembros o fiscales. No se recibieron completos y a tiempo los materiales: urnas, boletas, actas. Este retraso fue generalizado, marcando desde la primera hora de los comicios una notable diferencia con las puntualísimas elecciones organizadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1984 y en 1990.

El CSE no dio a conocer el volumen exacto de estas irregularidades, que tuvieron graves consecuencias. El retraso en abrir fue, en promedio, de unas dos horas y llegó a veces hasta seis horas o más. Fue notable cómo la gente se mantuvo en las largas filas, esperando paciente o impacientemente, pero esperando. Aun sin retrasos, el proceso mismo de votar se alargó por causa de las seis boletas, una para cada cargo sujeto a elección.

Las JRV debían cerrarse oficialmente a las 6 de la tarde para dar paso al también prolongado escrutinio de los votos en las seis urnas. Este proceso -conteo y elaboración de las actas- tardaba, cuando menos, cuatro horas. Como tantas JRV atrasaron su apertura, se retrasó también su cierre, y por lo tanto se retrasó en extremo el anuncio de los primeros resultados. En la noche, gran parte del país estaba ya en tensa expectativa, pendiente de los canales de televisión o de la radio, dispuesto a no dormir.

No fue hasta las 3 de la madrugada del 21 de octubre que la presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, anunció los primeros resultados que habían llegado al centro de cómputos de Managua vía telegrama. Con el 2.7% de las JRV escrutadas la tendencia inicial favorecía a Arnoldo Alemán: 18 mil votos contra 15 mil del comandante Daniel.

Durante los días posteriores Rosa Marina Zelaya seguía presentando resultados que carecían de sustento, pues, ya en esos días el fraude orquestado por las autoridades del CSE era más que evidente. A pesar de tantos pesares, la presidenta del CSE continuó el día 22 y el 23 dando resultados preliminares elaborados en base a los cuestionados telegramas.

El CSE convocaba a los medios -que cubrían en directo los informes- y a los observadores internacionales que se habían quedado en el país, buscando también algunos de ellos claridad sobre lo ocurrido. Zelaya no hacía referencia a la tensión política, a las imágenes del caos de Managua y de las miles de boletas electorales arrojadas en los causes de la capital, a las declaraciones que iban y venían en todos los sentidos, y con una frialdad cada vez más preocupante, minimizaba los problemas.

El día 24 de octubre de 1996, ante la avalancha de dudas y evidencias que daban cuenta de cada vez más graves anomalías en varios puntos del país -especialmente en Managua, Matagalpa y Jinotega, no por casualidad los departamentos donde eran liberales quienes dirigieron los Centros Electorales Departamentales CED y estando pendiente de respuesta el reclamo formulado por el FSLN, en apego a la Ley Electoral, de hacer el recuento a partir de las actas, el CSE dio orden de emprender esa tarea en todo el país. Sería un recuento aritmético de los votos, comparando los telegramas con las actas de cada JRV. Se entró así a otra fase de la crisis, que arrojó nuevas y más preocupantes evidencias del mega fraude electoral que dieron por vencedor al tristemente célebre Arnoldo Alemán.

5.1. Políticas neoliberales de Arnoldo Alemán

El 10 de enero de 1997, llega a la presidencia de la República Arnoldo Alemán, con un programa económico ultra neoliberal, que contemplaba según su gobierno “ambiciosas reformas estructurales” cuyo objetivo era la destrucción total de las conquistas sociales que la Revolución les entregó a los nicaragüenses en la década de los años ochenta.

El Gobierno de Alemán acordó con el FMI y otros acreedores internacionales la condonación de un 80% de la deuda nacional a cambio de aplicar un ajuste estructural que disminuía el gasto social en el país, así mismo el gobierno de Alemán pretendía liquidar todo lo relacionado a la Reforma Agraria, y devolver muchas de las propiedades confiscadas al somocismo. Además, el gobierno de Alemán redujo notablemente el gasto en Educación y Salud, dando continuidad y profundizando las políticas neoliberales del gobierno de Violeta Barrios. Así mismo, durante la administración de Alemán aumentó el descontento social por la aplicación de medidas que afectaban de gran manera la calidad de vida de los nicaragüenses.

En abril de 1999, el descontento con la Administración de Alemán, acusado a diestra y siniestra de incumplir sus promesas, revivió con fuerza en una ola de disturbios y protestas laborales, sobre todo en el sector del transporte, de tal magnitud que el presidente ordenó al Ejército la vigilancia de instituciones y edificios gubernamentales.

Alemán vio desplomarse su popularidad y por añadidura se encontró con que la Contraloría de la Nación le exigía explicaciones por el aumento de su patrimonio privado en un 900% coincidiendo con su ejercicio presidencial. Ante las dimensiones que tomaba la protesta, Alemán optó por congelar la liberalización del transporte público y mantener los subsidios a los combustibles. Habría que decir también, que durante el gobierno de Alemán se dieron huelgas por parte del sector salud, en particular los médicos que reclamaban un aumento salarial que les garantizará vivir con dignidad, y las protestas del sector universitario en su lucha por el 6% constitucional.

El gobierno de Alemán promovió más recortes en ese sector para el año 2000. La drástica reducción que se decidió implicó un notable aumento del desempleo. La reinserción de los desmovilizados no tuvo acompañamiento adecuado lo cual acarreó serios problemas económicos al país.

Otra línea del gasto público que se fue reduciendo desde 1994 es el gasto social, especialmente en el área de salud. La reducción tiene consecuencias más serias si se contrasta el presupuesto de la salud pública con el incremento poblacional. El gobierno de Alemán continuó las políticas neoliberales y profundizó la corrupción venida del gobierno de Violeta Barrios; usó el patrimonio para él, su familia y sus allegados vinculado a los sectores del gran capital y de la cúpula política de derecha del país.

5.2. Inmensa corrupción de alemán y la cúpula de derecha en Nicaragua

Nicaragua llegó a ocupar en el año 2001 (último año del gobierno de Arnoldo Alemán), el tercer lugar entre los países percibidos como más corruptos en América Latina, según el informe de Transparencia Internacional, dado a conocer el 27 de junio de ese año en París, Francia.

La organización define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. Entre 1997 y 1999 se publicaron 3,124 denuncias de actos de corrupción. Dichos actos fueron divulgados por su vice presidente Enrique Bolaños, luego que fue Presidente partir del 2002; entre los actos ocurridos en la administración de Arnoldo Alemán, bautizados popularmente como:

- El caso del Canal 6
- La Huaca 1
- La Huaca 2
- Los Camionetazos
- Los Checazos
- Las Terrazas
- La Chinampa y otros.

A continuación, se detalla algunos de los actos de corrupción cometidos por el ex presidente Arnoldo Alemán y su cúpula:

- Mega salarios: El deficiente trabajo de Arnoldo Alemán le costó al pueblo de Nicaragua 285 mil dólares al año y sus 400 funcionarios de “alto nivel” consumían 40 millones de dólares mensuales.
- Los Tarjetazos: El Banco Central de Nicaragua emitió tarjetas de crédito pagadas por los contribuyentes a favor del ex presidente Alemán, quien gastó en su período de gobierno casi 2 millones de dólares en pasajes de avión y regalos de lujos a las personas de su círculo.
- Los Checazos: Fueron cheques emitidos por la Dirección General de Impuestos DGI a favor del extinto BANIC para pagar deudas de la empresa Genisa, propiedad de Alemán por un monto de 111 mil dólares.

- La Chinampa: Finca de 615 manzanas, fue desarrollada mediante la perforación de pozos hechos por Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados INAA, electrificada con recursos de ENEL y usaron materiales de construcción de la empresa estatal MAYCO. El hecho más descarado fue que, el ganado de la propiedad provenía del Instituto de Desarrollo Rural IDR.
- Canal 6: Por órdenes expresas de Alemán el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP emitió un cheque por 500 mil dólares para compra del equipo de canal 6, de igual manera la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales EAAI e INTUR aportaron 350 mil dólares adicionales con el mismo fin. Cabe destacar que dicho equipo jamás fue comprado.
- Casa Presidencial: Esta fue una de sus “Obras no Palabras” que originalmente tendría un costo de 4 millones de dólares (donados por Taiwán), y sin tener una modificación sustancial el proyecto terminó costándonos a los nicaragüenses 14 millones de dólares, teniendo que recurrir a préstamos para construirla.
- Palacete de Pochomil: Los fondos del MTI para hacer frente a los daños causados por el huracán Mitch en 1998 terminaron en la construcción de un Palacete en las playas de Pochomil Viejo. Esta lujosa propiedad pertenecía al director de la DGI Byron Jerez.

En suma, el gobierno corrupto de Arnoldo Alemán representó una pérdida de 100 millones de dólares, lo que era equivalente al 10% del presupuesto de la República en el año 2002.



5.3.Tragedia del Huracán Mitch y robo de la ayuda

El huracán Mitch (1998), fue uno de los peores y más devastadores desastres naturales en la historia reciente. Su paso por Centroamérica dejó más de 9,000 muertos y una cifra similar de desaparecidos en cuatro países de la región.

En Nicaragua, el número de muertos tras el huracán llegó a más de 2800 (según Barricada de la época) y a 970 el de desaparecidos. Las pérdidas económicas ascendieron a 988 millones de dólares, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La tragedia marcó un antes y un después en la historia de nuestro país.

Sin embargo, el Mitch no solo generó la pérdida de dinero y vidas humanas. Representó además uno de los capítulos más negros en la historia nacional, por la corrupción en el manejo de los recursos financieros donados por la cooperación internacional para la atención del desastre y la recuperación del país.

AVALANCHA DEL VOLCÁN CASITA

El 30 de octubre de 1998 se desprendió un gigantesco segmento de roca de 500 metros de largo de la cima sureste del volcán Casita. Según estimaciones del Marena, con un tamaño de:

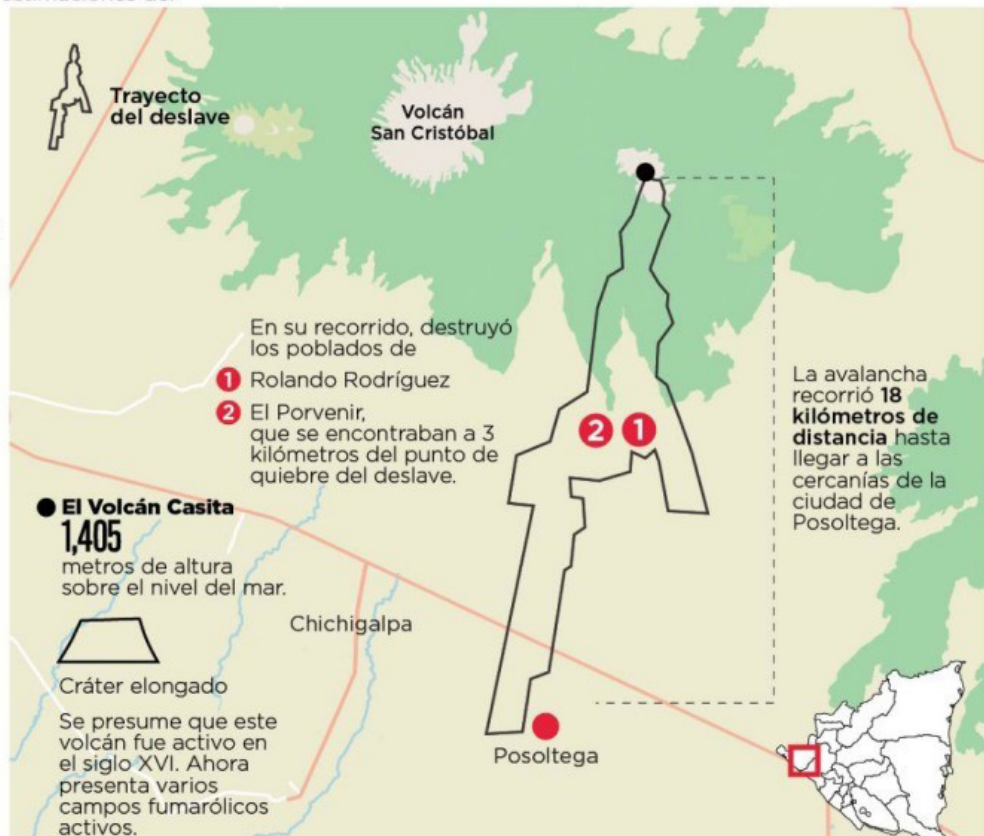


Se calcula que un volumen de **200,000** metros cúbicos se deslizó desde la cima del volcán.

Muertes aproximadas:
1,650 personas

La avalancha fue provocada por tres fenómenos que coincidieron en el tiempo:

1. El desprendimiento de los suelos de roca de la cima del volcán Casita.
2. La saturación de los suelos en esa área.
3. La extraordinaria acumulación de cerca de 1,700 milímetros de lluvia en una semana.



En el 2000, la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR) estableció que más de 400 mil dólares de la ayuda recibida, fueron desviados para usos personales de algunos funcionarios públicos durante el período presidencial de Arnoldo Alemán (1997-2001).

Entre los implicados figuraba el extitular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Byron Jerez, quien construyó una mansión con el dinero del Fondo de Emergencia de Atención a Desastres.



La valiente alcaldesa de Posoltega (Chinandega) Felicita Zeledón fue la que alertó sobre la situación de peligro en el cerro Casitas y de los peligros que enfrentaban las miles de familias ubicadas en esa zona, pero nunca fue escuchada, sino que al contrario fue tildada de “loca”, por Arnoldo Alemán. Al poco tiempo miles de personas morían enterradas por el deslave del Casitas, por irresponsabilidad de Alemán y los funcionarios neoliberales de su gobierno.

Fue entonces que una avalancha de lodo, piedras y vegetación cayó sobre los habitantes de las comunidades Rolando Rodríguez y El Porvenir, provocando la desgracia el 30 de octubre de 1998.

El comandante Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, respondió al llamado de la Alcaldesa Felicita Zeledón y fue el primero en atender a los afectados del huracán y del deslave del Volcán Casita, acompañando al Pueblo de Posoltega y dando su solidaridad sandinista, en todo el apoyo que se podía dar en aquel momento.

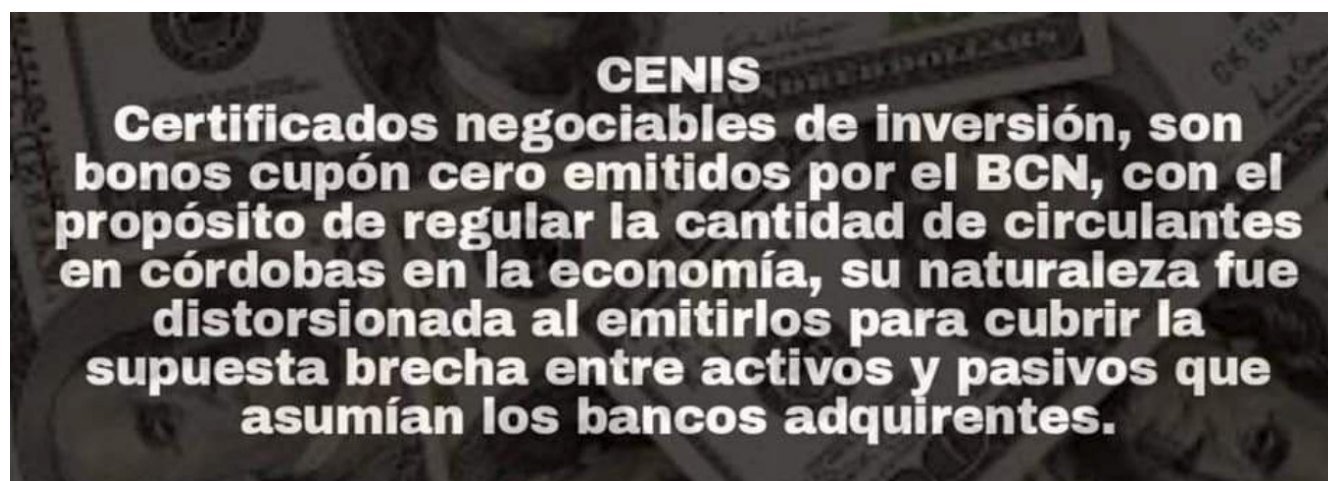


6. Gobierno de Enrique Bolaños, continuidad neoliberal y más corrupción

6.1. Los CENIS y el destape de la HUACA 2000-2002

Durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2006) las políticas económicas neoliberales continuaron, políticas basadas en la fe ciega en la privatización de los recursos estatales, en la reducción en los gastos públicos y la desregulación en general crearon un infierno de *laissez-faire* para la gran mayoría empobrecida. La “nueva era”, prometida por Enrique Bolaños no se produjo, y solo continuó con el infierno neoliberal iniciado por doña Violeta y seguido por Alemán.

En ese contexto se destapa los actos de corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán, entre ellos el escándalo de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) que fueron emitidos de forma muy turbia y poco clara para la opinión pública, y se puede afirmar que hubo complicidad por parte de funcionarios de gobierno de Alemán, que en ese tiempo representaban los entes reguladores como por ejemplo Contraloría General de República, SIBOIF, Ministerio Público.



La trama de los CENIS comenzó con la quiebra del Banco Intercontinental (INTERBANK) intervenido el 7 de agosto del 2000, durante el proceso de las elecciones municipales. Le siguieron el Banco del Café (BANCAFE), intervenido el 17 de noviembre de 2000; el Banco Mercantil (BAMER), el 3 de marzo de 2001, y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) el 4 de agosto de 2001.

El proceso de intervención de los cuatro bancos (2000-2001): INTERBANK, BANCAFE, BANIC y BAMER, estuvo salpicado de intereses económicos y violaciones a las leyes bancarias aprobadas en 1999, por recomendaciones del Banco Mundial (BM).

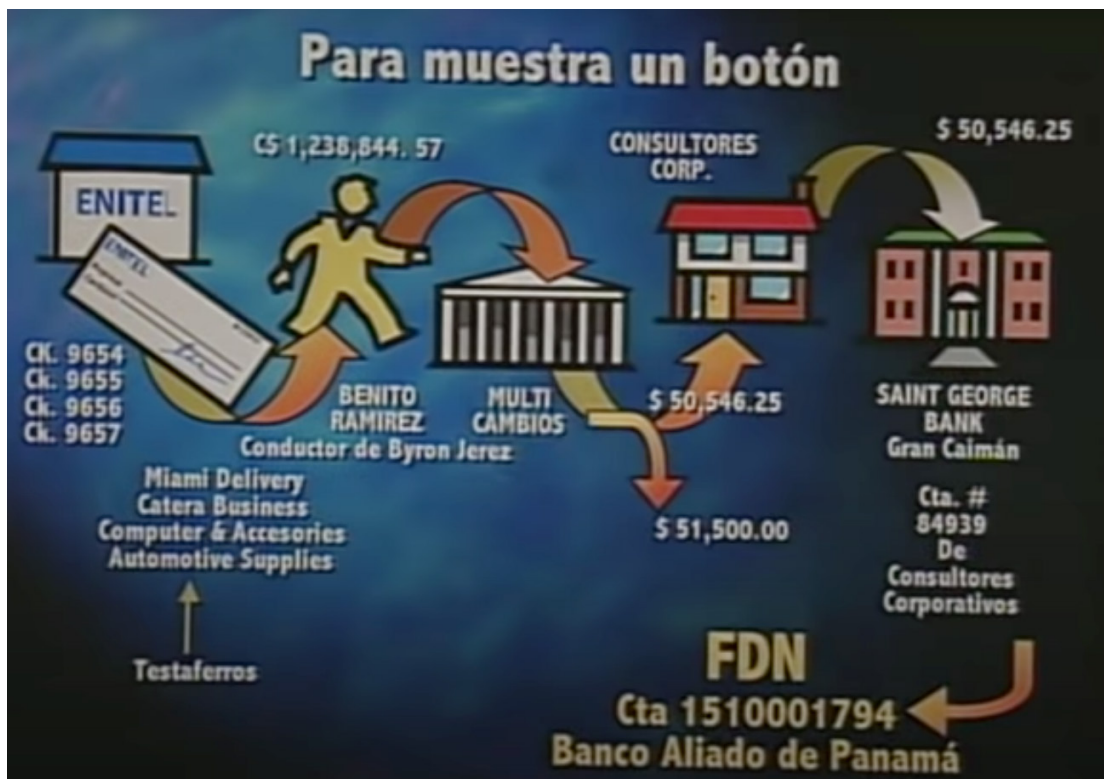
El designación de los miembros de las juntas administradoras y liquidadoras, encargadas de la liquidación de los cuatro bancos, se hizo al margen de las leyes financieras y por recomendación del ex presidente Arnoldo Alemán y el ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, aunque era facultad del Superintendente de Bancos, Noel Sacasa Cruz. En ese contexto, el ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, emitió el acuerdo presidencial 5292000 con el que autorizó la emisión de los CENIS.

Así mismo se debe establecer que, los CENIS se emitieron, no porque no hubiera otras opciones menos onerosas y menos riesgosas, sino porque fueron un requisito establecido por los accionistas de INTERBANK para levantar el amparo que impedía proceder a la liquidación de ese banco.

Su emisión fue un requisito del BANPRO para asumir al INTERBANK en un acuerdo de “fusión” entre ambos bancos. En concreto, se emitieron para responder a las exigencias planteadas en un acuerdo privado al que llegaron los accionistas del INTERBANK y los del BANPRO, demandando ambos que el Banco Central de Nicaragua (BCN) pagara los “platos rotos” por la cartera mala del INTERBANK. Los pagaría emitiendo CENIS a una tasa de interés de cerca del 17%. Tan onerosa tasa de interés la exigieron los accionistas del INTERBANK y del BANPRO. Exigieron también que el Banco Central de Nicaragua (BCN) se hiciera cargo, por su cuenta y riesgo, de la cartera fraudulenta de los hermanos Centeno Roque en el INTERBANK. En consecuencia, esta acción provocó que al pueblo de Nicaragua se le agregará una deuda de 492 millones de dólares, todo para salvar de la quiebra a los oligarcas del país.

Posteriormente a los sucesos de los CENIS, el 7 de agosto del 2002, tras una expectativa alimentada durante cuatro tensos días por los medios de comunicación, Enrique Bolaños inició una ofensiva anticorrupción en contra Arnoldo Alemán y su círculo de hierro.

Pasó por fin de una estrategia política a una estrategia político-judicial. En acto solemne, la Procuraduría General de la República reveló a la nación cómo Alemán dirigió el robo de cien millones de dólares a una docena de instituciones del Estado para “lavarlos” en bancos panameños y en empresas “de papel” engrosando así su patrimonio y el de familiares y allegados. El hallazgo de esta primera Huaca de Alemán causó tanta indignación como esperanzas de que el corrupto ex presidente pagara por sus delitos en contra del pueblo de Nicaragua.



Alemán afirmó que Bolaños, era socio de la corrupción y como otros altos funcionarios, se habrían beneficiado del “botín”, a través de sobresueldos extrapresupuestarios (extraídos de la guaca) que Alemán pagaba en efectivo y en sus oficinas. El PLC informó que habían utilizado el dinero detectado en “el embudo” de la guaca para actividades operativas, políticas y financieras del partido, especialmente durante las campañas electorales.

6.2.Bolaños y la Privatización de la Salud pública y la crisis energética 2003-2006

Para Nicaragua, como para los demás países empobrecidos de América Latina, la crisis de la deuda externa significó condicionar su economía a los intereses extranjeros y la adopción de medidas neoliberales, entre éstas: la disciplina fiscal y reorientación del gasto público: reducción del gasto social en áreas sensibles como Salud y Educación.

En Nicaragua el sistema de Salud pública fue desmantelado por el régimen neoliberal, promoviendo la privatización de los hospitales. Esta medida criminal afectó a las familias más pobres de Nicaragua, y sobre todo se violentó el derecho humano que posee todo ciudadano nicaragüense a ser atendido con calidad y responsabilidad, a fin de garantizar una mejor calidad de vida para todos y todas. Además, en los hospitales públicos durante el régimen neoliberal se realizaban cobros excesivos a la población que buscaba atención médica, así mismo, la infraestructura hospitalaria se degradó a niveles inhumanos, las condiciones de trabajo del personal médico eran paupérrimos, lo que generaba como consecuencia un grave deterioro de los servicios hospitalarios a la población más pobre del país.

Para que tengamos una idea de lo expuesto anteriormente en 1989, el Estado invertía en salud 35 dólares por persona al año y a la vez se le garantizaban todos los medicamentos que necesitaran los pacientes, en el 2005, la inversión fue de 16 dólares por persona al año.

En medicamentos la inversión era de 45 millones de dólares en 1990, en el 2005 fue solamente de 12 millones de dólares. Para el 2005, sólo el 40% de la población nicaragüense tenía acceso a los medicamentos esenciales. En la Nicaragua neoliberal, dos tercios del gasto en medicamentos lo asumían las familias y no el Estado, y esta fue una verdadera tragedia en un país como el nuestro, donde el 82% de la población sobrevivía con menos de dos dólares diarios, y el 43% de esa población con menos de un dólar al día.

Crisis energética 2003-2006

La crisis de los apagones en Nicaragua durante el gobierno neoliberal de Enrique Bolaños ocurrió debido a la incapacidad de la gestión de su gobierno. Cuando Bolaños fue vicepresidente de Arnoldo Alemán, fue presidente del INE, (ente estatal regulador de todo el sistema energético nacional), desde ese cargo sólo promovió la privatización de la distribución de la energía a favor de la española Unión Fenosa y la privatización de varias de las empresas generadoras.

Durante los siguientes cinco años, ya como presidente, no hizo nada para articular responsablemente el sistema energético del país ni para comenzar a superar la altísima dependencia de Nicaragua con el petróleo y sus derivados para generar energía. Proyectos energéticos eólicos, hidroeléctricos o geotérmicos, listos para ponerse en marcha y con viabilidad económica, no fueron promovidos.

En Nicaragua en este periodo el 83% de la energía dependía de los derivados del petróleo. A pesar de poseer importantes potencialidades de fuentes alternas de energía, como la energía geotérmica, eólica e hídrica, el gobierno de Bolaños no invirtió en su desarrollo, tampoco hizo nada en el mantenimiento de la capacidad instalada existente, generando con esto mayor insuficiencia de energía y altos niveles de obsolescencia de equipo, con costos de generación muy altos por su dependencia del petróleo.

El incremento en los precios del petróleo, sumado a las deficiencias en el sector energético, provocaron constantes racionamientos de energía durante todo el año 2006, llegando a producirse apagones de hasta 15 horas en algunas regiones del país. La crisis llevó a enfrentamientos de los consumidores con el gobierno y la transnacional española UNIÓN FENOSA, alcanzando puntos críticos en algunos meses de ese año.

Las protestas de la población se generalizaron en todo el país, exigiendo incluso la salida de la empresa transnacional. Este proceso culminó el 21 de agosto en una marcha con la consigna de “No a la entrega de 9 millones de dólares a UNIÓN FENOSA” y la toma de las instalaciones del ente regulador de la energía (INE); bajo esta presión el Consejo Directivo del ente regulador resolvió iniciar un proceso de arbitraje.

Por otro lado, el 25 de agosto, miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República denunciaron la nulidad del contrato de concesión de distribución de energía a UNIÓN FENOSA. En medio de estas circunstancias, el INE emitió licencia formal de importación de hidrocarburos a Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), facultando a esta empresa para negociar la traída de petróleo ofrecido por el ex presidente venezolano Hugo Chávez en condiciones solidarias y favorables.

Fue posteriormente con el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, en el año 2007, que comenzó resolverse esta situación.

6.3. Alzas en el transporte urbano colectivo

Otro entre los más agudos problemas del periodo neoliberal, fue el incremento de las tarifas del transporte público, por los altos precios del petróleo y la ineficiencia del gobierno de Enrique Bolaños en la búsqueda de su solución. La población nicaragüense se vio afectada por la aplicación de los transportistas de un incremento arbitrario en el pasaje urbano. Así, el año 2006 inició con paros de transporte que afectaron a más de 850 mil usuarios de Managua. Los transportistas reclamaban un subsidio gubernamental de 20 millones de córdobas para compensar los altos precios del combustible o que les autorizaran un alza de 14 centavos de dólar en el precio del pasaje. Luego de una semana de paro, no había aún una solución a la problemática y se reportaban heridos y detenidos por enfrentamientos entre los transportistas y la Policía Nacional. El 14 de febrero de 2006, los transportistas y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo.

El Gobierno concedió al sector un nuevo subsidio de 4.7 millones de dólares, los cuales se iban a obtener de un impuesto temporal sobre las utilidades mensuales de las empresas petroleras. La propuesta fue avalada por la Asamblea Nacional, pero la medida no prosperó, dadas las protestas y resistencias de las compañías petroleras que obligaron al Estado nicaragüense a echarse atrás.

La crisis se superó hasta finales del año con la reducción de las tarifas del transporte negociada por la alcaldía sandinista de Managua y los transportistas, luego de conseguir petróleo venezolano en condiciones de pago muy favorables.

7. Oposición constructiva del FSLN y luchas populares contra el neoliberalismo

7.1. Oposición constructiva del FSLN durante los gobiernos neoliberales

El 25 de febrero de 1990, se abrió una nueva etapa histórica para Nicaragua. La nueva fase significó luchar cada día defendiendo las conquistas revolucionarias, desde aquel histórico discurso del Comandante Daniel en la plaza de no alineados, que marcó la continuación de la Revolución bajo nuevas circunstancias y nuevos retos:

“Nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y estamos acostumbrados a pelear desde abajo [...] Entonces ahora que hay un poder popular, que hay un poder revolucionario en este país, estamos en mucho mejores condiciones, en el corto tiempo, de volver a gobernar en este país, de volver a gobernar desde arriba [...] El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el pueblo de Nicaragua, seguirá gobernando desde abajo”.

En 1990, las cosas eran diferentes. Desde el punto de vista político, ser oposición y gobernar desde abajo significaba generar las condiciones para la unidad de la clase trabajadora como protagonista en las decisiones del país y presente en los espacios institucionales de toma de decisiones.

También ser oposición y gobernar desde abajo era fortalecer la organización y desarrollar las luchas sociales y comenzar a construir en la oposición nuevas formas organizativas que garantizaran gobernar desde abajo. En estas condiciones, el FSLN fortaleció la lucha ideológica contra la visión de la realidad que promovía el neoliberalismo, contra su propaganda, contra sus valores y contra los argumentos que utilizaban para justificar sus políticas y de esa manera evitar la desmovilización de la conciencia del pueblo.

El FSLN a la vez, inició una política de reconciliación con todas las fuerzas que adversaban al neoliberalismo, con un espíritu de paz y democracia, en todos los ámbitos de la lucha que debía plantearse sin tregua para defender y garantizar el bienestar del pueblo de Nicaragua.

7.2.FSLN acompañando las luchas populares.

La lucha de los trabajadores.

Desde que en 1992 Nicaragua se sometió a la condicionalidad cruzada del FMI y el Banco Mundial se estableció una política de drástica restricción de la inversión pública en salud y educación. Una de las variables más importantes sobre la que recayó esta política de draconiana restricción del gasto en educación y salud fue el “congelamiento” de los salarios de maestros y trabajadores de la salud. También, la severa reducción en las asignaciones para comprar medicamentos y para reparar y mantener escuelas y centros de salud.

El congelamiento de los salarios nominales de maestros y trabajadores de la salud se reflejó en una ostensible reducción de sus salarios reales desde 1992 hasta 1997. Desde 1997 se inició un modesto y tortuoso proceso de recuperación salarial de estos dos sectores gracias a las luchas que emprendieron sus gremios desde los inicios de los gobiernos neoliberales y que continuaron a lo largo de la década de los años 90. Ejemplo de esto ocurrió el 9 de junio de 1998, cuando después de 125 días de paros, manifestaciones y huelgas, y tras más de 45 reuniones de negociación que el gobierno neoliberal de Arnoldo Alemán, más de 3,800 médicos lograron un reajuste salarial significativo gracias al apoyo que brindó el FSLN y FETSALUD.

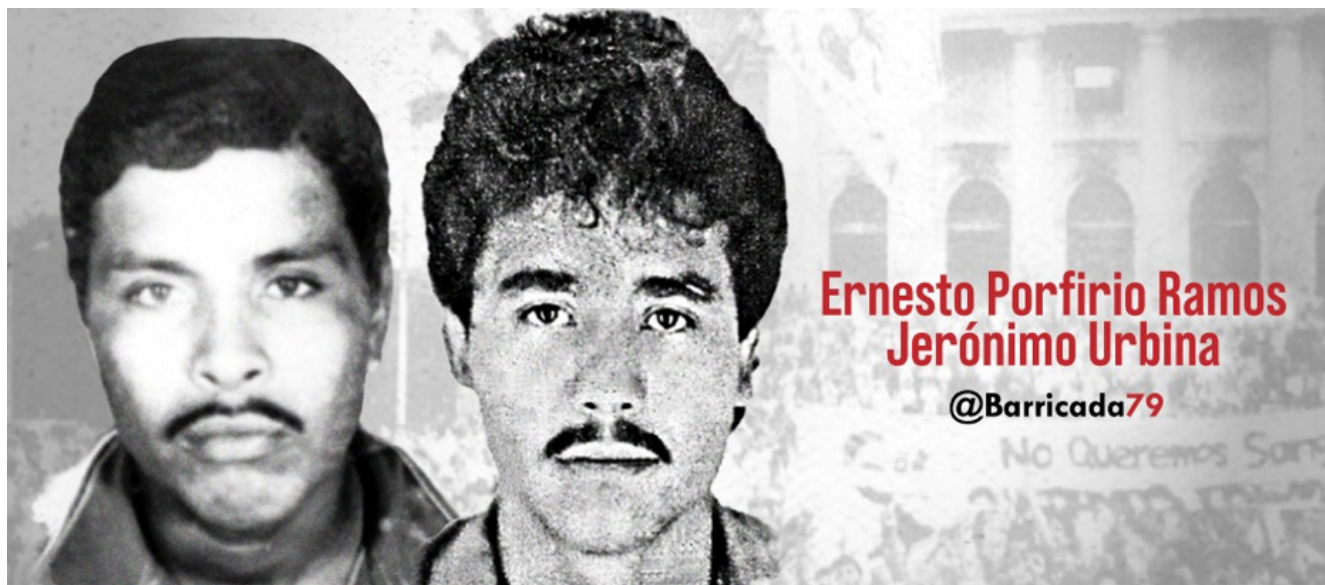
La lucha de los Universitarios

Protestas por el derecho a una universidad gratuita, 6% constitucional 1995-2002

Desde finales de 1991 la comunidad universitaria nicaragüense inició su reclamo por el 6% y la defensa de la Autonomía. Esta lucha enfrentó también a una gran campaña de propaganda por parte del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que pretendió manipular a la población, usando datos falsos para tratar de detener el masivo apoyo a la causa de los universitarios.

Después de movilizar a miles de nicaragüense a favor de la causa universitaria, derrotar la campaña de mentira del gobierno y presionar a los diputados, se logró la Interpretación Auténtica de la Ley 89, efectuada por la Asamblea Nacional el 19 de agosto de 1992 dejando claramente establecido que el 6% debía calcularse y garantizarse en base al “total de ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independientemente del origen de dichos ingresos”.

Después de 10 meses de lucha continua de la comunidad universitaria (noviembre 1995-agosto 1996), que tuvo el saldo doloroso de dos compañeros caídos, Porfirio Ramos y Jerónimo Urbina, el 13 de diciembre de 1995 bajo el gobierno de Violeta Barrios.



El 13 de diciembre de 1995, en el marco de la lucha por el derecho universitario del 6% y la autonomía universitaria, fueron asesinados Jerónimo Urbina, joven estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería y Porfirio Ramos, trabajador universitario de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas.

La firma de los acuerdos en abril de 1999 entre el gobierno y el CNU se desarrolló en el contexto de un paro de transporte, antecedido de movilizaciones y caravanas desde los barrios hacia la Asamblea Nacional. Incluyó la toma de edificios, como el que se produjo el 20 de abril al Banco Central de Nicaragua donde perdió la vida el estudiante Roberto González, de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua.

La firma de los acuerdos en abril de 1999 entre el gobierno y el CNU se desarrolló en el contexto de un paro de transporte, antecedido de movilizaciones y caravanas desde los barrios hacia la Asamblea Nacional. Incluyó la toma de edificios, como el que se produjo el 20 de abril al Banco Central de Nicaragua donde perdió su vida el estudiante Roberto González, de la carrera de Derecho de la UNAN-Managua, tras recibir disparos de “balas de goma” por parte de la Policía Nacional.



El 20 de abril de 1999, en el marco de la lucha estudiantil en defensa del 6%, cayó el estudiante Roberto González Herrera, en las instalaciones del Banco Central de Nicaragua. A la memoria de Roberto se dedicó el Bufete Jurídico de la UNAN - Managua. El mejor homenaje para ese joven quien soñaba ser abogado para defender a los pobres.

En los años 1999-2000 después de la última crisis entre el gobierno y las universidades, se produjo una relativa normalidad luego de la firma de un acuerdo en que, aunque no se cumplía con el monto completo del 6% (y las universidades no renunciaban a lo establecido constitucionalmente), se establecieron mecanismos para completarlo por la vía de la gestión de recursos externos. Con ello las Universidades contribuían de manera constructiva a la estabilidad nacional y a su propia estabilidad, como premisa necesaria para profundizar su desarrollo institucional, a la cual las universidades se abocaban.

Nuevamente en 2001, el gobierno de Arnoldo Alemán pretendió vulnerar otro derecho de las universidades públicas, consistente en la exoneración del pago de los servicios públicos, particularmente la electricidad. La movilización y defensa de los derechos de los universitarios evitó que se concretizara tal propósito. Sin embargo, dos años después de haberse firmado el acuerdo gobierno-universidades, de nuevo volvió a la discusión el tema del presupuesto universitario para las universidades de servicio público a finales del año 2001.

El gobierno de Enrique Bolaños tampoco cumplió con el 6%, al pretender asignar solamente 670 millones cuando el 6% real para ese año era de 814.5 millones de córdobas (134.5 millones menos) y al final se asignaron 721 millones de córdobas (equivalente al 5.15%) y ese monto se alcanzó luego de un esfuerzo de movilización de la comunidad universitaria.

Luego de 16 años de luchas universitarias para dar cumplimiento constitucional al derecho a la educación superior a los nicaragüenses, fue hasta en el año 2007, con el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Daniel Ortega que se cumplió plenamente con el 6%.

La lucha contra la privatización de la educación y en respaldo a los educadores

Acceso nulo a la educación para los hijos de los pobres y campesinos

Durante la etapa de los gobiernos neoliberales se aplicó “un nuevo modelo de educación” que buscaba privatizar la educación transfiriendo a los padres de familia, a los docentes y a la comunidad educativa, una amplia cuota de responsabilidad en el manejo del sistema educativo y en la administración de las escuelas, a través de la llamada Autonomía Escolar.

Se trataba de la privatización de la educación con el objetivo de excluir a los hijos de los obreros y campesinos al acceso a la educación gratuita y de calidad, tal como lo establece la constitución. Con la autonomía escolar se intentó dismantelar la confianza del pueblo en el sistema escolar público, violentando con esto, los derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua.

Se institucionalizó en el régimen neoliberal de Bolaños una política de cobro a las familias, llevándolas de hecho a no poder matricular a sus hijos, lo cual disparó los índices de analfabetismo y de retención escolar. Además, un sistema escolar reducido a un negocio, corrompió al sector hasta llegar a privilegiar el nombramiento de maestros empíricos, para no tener que pagar a maestros de formación. La carrera magistral se volvió una carrera desprestigiada, en cuanto lleva a los estudiantes al desempleo o a un futuro de pobreza y de muy bajos salarios (los más bajos de la región).

La calidad de la educación pública llegó a sus niveles más bajos, ofreciendo una enseñanza deficiente y una escasa inversión en capital humano (entre los más bajos del planeta).

El modelo de “autonomía escolar” intentó destrozarse el sistema educativo nicaragüense, dejando a cientos de miles de niños, adolescentes y jóvenes sin el derecho a recibir una educación digna y de calidad. Pero los docentes y la comunidad educativa luchó en contra de ese intento de empobrecer ideológicamente a nuestro pueblo.

En el 2007, con el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional al gobierno este modelo excluyente fue abolido por orden del comandante Daniel Ortega restituyendo el derecho al pueblo de Nicaragua de educar a sus hijos en ambientes dignos, con un modelo de educación gratuito y de calidad en beneficio de las familias de Nicaragua.

Lucha contra la privatización de la salud y en favor de los trabajadores de salud

Anterior a las medidas neoliberales en Nicaragua, la población no pagaba ni un solo centavo por los servicios de salud, pues el proceso revolucionario sandinista garantizaba la gratuidad de este derecho, tal como lo establece la Constitución, pero a partir de 1990 el Fondo Monetario Internacional, junto con el gobierno de Violeta Barrios disponen que sea privatizado todo el sector de salud en nuestro país.

La justificación de estos gobiernos fue que el pueblo nicaragüense no pagaba los suficientes impuestos y que el Estado tenía que pagar la deuda externa e interna de Nicaragua y que la única medida razonable era disminuir el gasto del sector salud. Esto a la vez provocó la disminución de los salarios del personal médico y auxiliares que trabajaban en los hospitales de nuestro país.

En Nicaragua la lucha por preservar el derecho a la salud gratuita la promovió el Frente Sandinista, a través de diferentes formas de lucha. Sin embargo, el régimen neoliberal se valía de los medios de comunicación a su servicio para desacreditar la lucha del pueblo. La privatización trajo consigo grandes males a nuestra población, muchas personas de escasos recursos morían en las salas de los hospitales por falta de medicamentos esenciales.

Es a partir, del 2007 con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el comandante Daniel Ortega inicia un proceso de restitución de derecho a la salud que contempla muchas estrategias y programas iniciando con la gratuidad de la salud. Junto a esta, se inicia un proceso para llevar la salud a las comunidades más alejadas principalmente en las zonas de la Costa Caribe, el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, dotación a las unidades de tecnología, incremento del número y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos, entre otras. De esta manera, el pueblo de Nicaragua puede gozar de sus derechos humanos, y que solo el gobierno del FSLN garantiza a la población de menos recursos de nuestro país.

8. Bibliografía

- Hernández Ruigómez, Manuel (2012) La Nicaragua sandinista y las elecciones de febrero de 1990: transición a la democracia o alternancia democrática. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid
- Muro Rodríguez, Mirta -et.al- (1986) Nicaragua y la Revolución Sandinista. Ed. Ciencias Sociales. La Habana
- Tinelli, Giorgio (2016) La cultura política del sandinismo: nacimiento, desarrollo, y realineamiento de una anomalía política centroamericana. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Reseña Histórica de la lucha del 6% Constitucional en: <https://www.unan.edu.ni/index.php/resena-historica>
- Revista Envío 1984
- Revista Envío 1987
- Revista Envío 1988